



**VNiVERSiDAD
D SALAMANCA**

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

**TRABAJO FIN DE GRADO
GRADO EN DERECHO**

Derecho Administrativo, Financiero y Procesal.

Derecho Procesal.

Curso 2019/2020

**EL CONSEJO GENERAL DEL
PODER JUDICIAL:
CONSIDERACIONES GENERALES
E INDEPENDENCIA JUDICIAL.**

Pablo Videla Rodríguez.

Tutora: María Inmaculada Sánchez Barrios

Salamanca, junio de 2020.

**TRABAJO FIN DE GRADO
GRADO EN DERECHO**

Derecho Administrativo, Financiero y Procesal.

Derecho Procesal.

**EL CONSEJO GENERAL DEL
PODER JUDICIAL: ASPECTOS
GENERALES E INDEPENDENCIA
JUDICIAL.**

**THE GENERAL COUNCIL OF THE
JUDICIAL POWER: GENERAL
CONSIDERATIONS AND JUDICIAL
INDEPENDENCE.**

Pablo Videla Rodríguez.
pablovidela@usal.es

María Inmaculada Sánchez Barrios.

RESUMEN

El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los Jueces y Magistrados en España. Su labor fundamental es la de garantizar su independencia en el ejercicio de su función jurisdiccional. Esta tarea es fundamental para asegurar el correcto equilibrio entre poderes y el cumplimiento de los fines propios del Estado de Derecho.

A lo largo de sus cuatro décadas de actuación ha sufrido numerosas reformas legislativas tendentes a establecer variaciones en cuanto a la forma de elección de sus vocales -principalmente para aumentar la influencia de las Cortes Generales-, aunque también se han modificado competencias y atribuciones.

La institución del CGPJ -a partir del artículo 122 de la Constitución y del posterior desarrollo legislativo-, la independencia de Jueces y Magistrados, y el nombramiento de los vocales serán las líneas de análisis en torno a las cuales girará este trabajo, prestando atención tanto a la doctrina como a la legislación y jurisprudencia.

PALABRAS CLAVE: Consejo General del Poder Judicial, independencia judicial, elección, vocales, Ley Orgánica del Poder Judicial, atribuciones.

ABSTRACT

The General Council of the Judicial Power is the government institution of Judges and Magistrates in Spain. Its main aim is to guarantee the independence of its subordinates in their exercise of the jurisdictional duty. This task is crucial in order to ensure the correct equilibrium between powers and the achievement of the purposes of the State of Law.

During the four decades of its operation has suffered many legislative changes which tended to stablish variations in the election model of its vocals -mainly in order to increase the influence of the Legislative Houses-, even though some of its functions and powers also have been amended.

The CGPJ institution -from the article 122 of the Constitution and posterior legislative development, the independence of Judges and Magistrates, and the designation of the vocals will be the line of analysis of this essay, paying attention not only to the doctrine but also the legislation and jurisprudence.

KEYWORDS: General Council of the Judicial Power, judicial independence, election, vocals, Organic Law of the Judicial Power, functions

ÍNDICE.

INTRODUCCIÓN.	9
1. CONTEXTUALIZACIÓN.	10
1.1. Antecedentes históricos del CGPJ.	12
2. MODELOS DE GOBIERNO JUDICIAL.	13
2.1. Modelo “americano”.	14
2.2. Modelo interno.	15
2.3. Modelo institucional.	16
2.3.1. El “Conseil Supérieur de la Magistrature”.	16
2.3.2. El “Consiglio Superiore della Magistratura”.	18
3. INDEPENDENCIA JUDICIAL.	19
3.1. La independencia judicial en la doctrina.	20
3.2. La independencia judicial en la historia.	21
3.3. El papel del CGPJ en la independencia judicial.	23
3.4. Concreciones de la independencia judicial.	26
3.5. Inamovilidad y responsabilidad de los jueces y magistrados.	27
4. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CGPJ.	29
4.1. Presidencia del CGPJ.	30
4.2. Comisión de Igualdad.	31
4.3. Comisión de Asuntos Económicos.	31
4.4. Comisión Disciplinaria.	32
4.5. Comisión Permanente.	32
5. FUNCIONES DEL CGPJ.	33
6. COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN DE LOS VOCALES.	35
6.1. Composición.	35
6.2. Forma de elección.	38

6.2.1.	Ley Orgánica 1/1980 del Consejo General del Poder Judicial.....	38
6.2.2.	Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial.....	40
6.2.3.	Ley Orgánica 2/2001, de 28 de Junio, sobre composición del Consejo General del Poder Judicial.....	42
6.2.4.	Ley Orgánica 4/2013, de 28 de Junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial.....	45
7.	CONCLUSIONES.....	47
8.	BIBLIOGRAFÍA.....	49
9.	RECURSOS WEB.....	51
10.	LEGISLACIÓN CONSULTADA.....	52

ABREVIATURAS.

- **art (s):** artículo (s)
- **BOE:** Boletín Oficial del Estado
- **CE:** Constitución Española
- **CGPJ:** Consejo General del Poder Judicial
- **CSM:** Conseil Supérieur de la Magistrature
- **EE.UU:** Estados Unidos
- **FJ:** Fundamento Jurídico
- **LOPJ:** Ley Orgánica del Poder Judicial
- **LOTC:** Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
- **LO:** Ley Orgánica
- **no.:** número.
- **p (p).:** página (s)
- **PSOE:** Partido Socialista Obrero Español
- **ss.:** siguientes
- **STC:** Sentencia del Tribunal Constitucional
- **UCD:** Unión de Centro Democrático
- **vol.:** volumen

INTRODUCCIÓN.

El Consejo General del Poder Judicial es uno de los paradigmas más característicos de la separación de poderes y del Estado de Derecho. Su función última es la de preservar a los Jueces y Magistrados de cualquier tipo de intromisión ajena, y por tanto, garantizar su efectiva independencia del resto de Poderes.

Con todo, este Trabajo Fin de Grado pretende analizar de forma genérica el órgano de gobierno judicial, el CGPJ, prestando atención a su finalidad constitucional, consagrada en el artículo 117 de la Norma Suprema, y a otros aspectos relevantes como las sucesivas reformas de la LOPJ y sus implicaciones sobre el Consejo y la forma de elección de sus vocales.

Sin embargo, es voluntad de este ensayo recalcar la importancia de la ya mencionada garantía de independencia judicial. A lo largo de estos últimos cuarenta años, desde el mundo político se han producido (y se producen) intentos de intervenir en el Poder Judicial, a pesar de que nuestro Texto Constitucional deja bien claro que esta independencia no es sino una de las concreciones de la separación de poderes.

A partir de sucesivas reformas legislativas, el órgano de gobierno del Poder Judicial ha ido quedando cada vez más dependiente de las formaciones políticas, ya que se ha articulado un formato de elección de vocales en el que las Cámaras han conseguido altas cuotas de influencia en la conformación del Consejo.

Con todo, y a pesar de que el CGPJ está siempre presente en la rutina diaria de jueces y magistrados -ya que regula cuestiones como sus nombramientos o promoción, y aplica su propio régimen sancionador- no podemos considerarlo dotado de funciones jurisdiccionales.

Sin duda, el CGPJ reviste una complejidad peculiar. Sus funciones, su acción, y los principios por los que su actividad está regida lo convierten en una pieza digna de análisis doctrinal y jurisprudencial, y le confieren una posición destacada y primordial en nuestro ordenamiento jurídico.

1. CONTEXTUALIZACIÓN.

El Consejo General del Poder Judicial no es otra cosa más que el órgano de gobierno de los jueces y magistrados en nuestro país. Este ente posee un fundamento constitucional¹ y su figura está recogida en **el artículo 122 de la Carta Magna**². Así las cosas el citado artículo expone:

“1. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.

2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.

3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.”

De lo anterior pudiera parecer que el CGPJ es parte integrante de llamado Poder Judicial, pero lo cierto es que no lo es, en el sentido de que no es un órgano jurisdiccional que forme parte de dicho Poder. No puede juzgar, es un órgano administrativo, de gobierno,

¹ Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, núm. 311, pp. 29313 a 29424.

² Además del anterior precepto existen otras tres referencias en nuestra Constitución al órgano de gobierno de los jueces. Se trata, por un lado, del art. 123.2 CE, donde se expresa que: *“El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley”*. Por otra parte, el artículo 124 de la Norma Fundamental, referido a la institución del Ministerio Fiscal, en su párrafo tercero menciona que la figura del Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno una vez escuchado el Consejo General del Poder Judicial. Y el art. 159 CE, a propósito de la composición y elección de los miembros del Tribunal Constitucional, recoge expresamente que éste *“se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial”*.

de los Jueces y Magistrados³. Así pues, esta aparente paradoja se confirma en dos aspectos que resultan fundamentales para comprender esta institución: el primero de ellos es que el CGPJ no posee ningún tipo de atribución o competencia que le permitan resolver los recursos contra las resoluciones judiciales dictadas por los tribunales ordinarios; el segundo es que las resoluciones del CGPJ son impugnables ante los órganos jurisdiccionales competentes.

El órgano de gobierno del Poder Judicial no es una realidad exclusiva del derecho español sino que en una gran parte de las democracias de nuestro entorno cuentan con figuras de carácter análogo a la nuestra. Si hablamos de Francia nos encontramos al Conseil Supérieur de la Magistrature; en Italia al Consiglio Superiore della Magistratura; y en Portugal al Conselho Superior da Magistratura⁴.

Estos organismos y sus equivalentes en otras naciones del mundo velan por el correcto funcionamiento de los sistemas de pesos y contrapesos (“checks and balances”) tan característicos en las democracias de corte liberal homologables a la nuestra. Al tiempo, porque el Poder Judicial se muestre alejado de cualquier intento de intromisión por elementos ajenos a él, normalmente procedentes del Poder Ejecutivo; a la par que intentan poner en valor la importancia de una justicia independiente en tiempos donde, desde no pocos sectores sociales, se ve con recelo la judicatura. La independencia, la imparcialidad y la seguridad jurídica son tres objetivos que constituyen la clave de bóveda de toda actuación judicial y del organismo rector en la materia que nos ocupa: el Consejo General del Poder Judicial.

³ RON LATAS, R.P.; LOUSADA AROCHENA, J.F., “El Consejo General del Poder Judicial: marco constitucional”, *Rev. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, 2016, vol. 20, p. 206-225.

⁴ Vid., entre otros, SÁNCHEZ BARRIOS, M.I., *La elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial español y de sus homólogos europeos*. Valencia. Tirant lo Blanch. 2007, donde, en varios epígrafes del mismo, se analizan -en diferentes países- estos órganos análogos a nuestro CGPJ.

1.1. Antecedentes históricos del CGPJ.

Antes de profundizar en la figura del CGPJ es conveniente realizar una aproximación histórica⁵ para repasar los antecedentes de dicho órgano y comparar los distintos modelos existentes de autogobierno judicial.

Es necesario remontarse al año 1837 para observar la primera intentona de establecer uno de esta naturaleza. Se propuso, en un primer lugar, que los nombramientos se realizaran por el Gobierno, previa propuesta de los Tribunales y que los ascensos se produjeran en función de la antigüedad, previo informe de las Juntas de Gobierno de las Audiencias. Esta iniciativa no fructificó.

Desde este momento y durante todo el siglo XIX se intentan de establecer, de forma infructuosa, las bases de un organismo que velase por la tan ansiada independencia judicial. Una de las propuestas más destacada fue la realizada por el Presidente de la República, Nicolás Salmerón, que en el momento de presentar su iniciativa ocupaba el cargo de Ministro de Gracia y Justicia. Su proyecto iba en la línea de lo planteado en la novedosa **Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870**, que es la primera en establecer de forma clara y contundente la necesidad de contar con un Poder Judicial verdaderamente independiente con respecto a los otros Poderes del Estado en ámbitos como la condición apolítica de los jueces; su eventual responsabilidad en caso de abuso de funciones; o la introducción de dinámicas competitivas para el acceso a la carrera judicial. Nuevamente, no se consiguió avanzar en la materia debido a que el Tribunal Supremo, órgano a priori encargado de llevar a cabo todos estos, había sido prácticamente privado de sus competencias debido a sucesivas normas promulgadas por el Gobierno.

Hasta 1923 no encontramos una iniciativa seria de establecer un órgano de autogobierno judicial. Así las cosas en el año 1923, bajo el gobierno dictatorial de Primo de Rivera se constituye la Junta Organizadora de Poder Judicial. Esta Junta se disolvió en 1925 sin lograr sus objetivos.

⁵ SÁNCHEZ BARRIOS, M.I., “Antecedentes del Consejo General del Poder Judicial”, *Revista Poder Judicial*, vol. 46, 1997, págs. 49-82.

Durante el franquismo la independencia judicial y, en general, cualquier planteamiento político-jurídico de corte liberal no era más que una utopía. Es durante este período cuando nos damos cuenta que un organismo autónomo que vele por la independencia de los jueces y magistrados solo puede ser planteado en los términos y bajo el paraguas de una democracia constitucional. De esta época es el llamado “Consejo Judicial”, constituido por la Ley de 20 de Diciembre de 1952, aunque en esencia misma no puede ser homologable al actual CGPJ. El actual modelo parte de una premisa previa que en tiempos pretéritos era una quimera: la garantía de independencia.

Este último tiene un nacimiento no exento de polémicas. En el año 1977 se publicó un borrador en prensa que suscitó críticas desde amplios sectores de la política y judicatura. Dicho borrador fue perfeccionado y adaptado de acuerdo al sentido constitucional del órgano y fue incluido en el texto constitucional sancionado por el Rey en el año 1978. Precisamente el mismo Rey, Juan Carlos I, presidiría en 1980 la primera reunión en la que se constituía el CGPJ.

2. MODELOS DE GOBIERNO JUDICIAL.

Como es bien sabido, todo organismo complejo requiere de una organización que se adapte a sus peculiaridades. En el caso de la justicia, el gran número de relaciones jurídicas que existen en nuestra sociedad globalizada exigen la articulación de una administración de justicia correctamente estructurada.

Una estructura de semejante tamaño aborda los problemas típicos de cualquier organización⁶ y otros genuinamente propios: su gobierno; sus recursos materiales, económicos y humanos; el nombramiento de los encargados de administrar justicia; su formación y promoción; la determinación de sus eventuales responsabilidades en el ejercicio de funciones; sus garantías de independencia. Todo ello respetando los principios de legalidad y proporcionalidad inherentes a todo estado social y democrático de derecho.

⁶ LÓPEZ GUERRA, L.M. “El gobierno de los jueces”. *Parlamento y Constitución. Anuario*, 1997, no 1, p. 11-32.

Existen varios modelos de gobierno judicial para la doctrina, cuya característica común es que son propios de Estados democráticos. Se concretan fundamentalmente en tres.

2.1. Modelo “americano”.

El primero de ellos es de tradición americana (modelo externo)⁷ y muy extendido en ese continente. En este sistema, la máxima instancia judicial (el Tribunal Supremo en el caso de los Estados Unidos) asume las funciones jurisdiccionales y las funciones de gobierno en lo relativo a los órganos judiciales del Estado. En este modelo no existe una carrera judicial propiamente dicha como en España, sino que los jueces son nombrados de por vida, entre juristas de reconocido prestigio.

Efectivamente, en el sistema norteamericano los jueces federales son elegidos por el Poder Ejecutivo; son nombrados por el Presidente previa consulta al Senado, que previamente realizará un examen a los candidatos para comprobar su aptitud, en el que se pueden tener en cuenta sus opiniones políticas y no solo el talante en el ejercicio de la función jurisdiccional.

El Senado de los EE.UU. tendrá la atribución de exigir la eventual responsabilidad penal a los jueces del Tribunal Supremo en los casos de delitos contra el Estado y otros graves crímenes. Si la sentencia fuera condenatoria, se romperá la norma que otorga carácter vitalicio a la función jurisdiccional, y será separado de la carrera judicial e inhabilitado para ejercer cualquier cargo público.

El núcleo central del sistema norteamericano⁸ está representado por la Judicial Conference, integrada por el Presidente del Tribunal Supremo de los EE.UU y máxima autoridad de esta instancia, y por los trece Presidentes de los tribunales federales de circuito y por doce jueces federales de distrito. Se trata de una estructura muy compleja y que asume tediosas y relevantes competencias; así las cosas se encarga de elaborar, a

⁷ MURILLO DE LA CUEVA, P.L., “El Gobierno del Poder judicial: los modelos y el caso español”. *Revista de las Cortes Generales*, 1995, p. 167-239.

⁸ WHEELER, R. “Origins of the Elements of Federal Court Governance”.

través de un órgano auxiliar, el proyecto de presupuestos; distribuir los fondos presupuestarios y coordinar la gestión administrativa.

En los Estados Federados, siguiendo a RON LATAS y LOUSADA AROCHENA⁹, podemos encontrarnos 6 sistemas de selección de los jueces: “elección con partidos políticos; elección no partidista; selección basada en méritos; designación por los gobernadores; elección por el legislativo; o cooptación judicial”.

A pesar de las particularidades expresadas anteriormente, el sistema norteamericano comparte algún que otro rasgo con los europeos, por ejemplo, el de separar al poder ejecutivo de la gestión del ámbito judicial.

2.2. Modelo interno.

El segundo de ellos atribuye las funciones de gobierno a un órgano del ejecutivo. En muchos países este modelo ha evolucionado hacia el de Consejo. Este modelo se puede calificar como interno, según MURILLO DE LA CUEVA¹⁰.

En este sistema el juez es contemplado como un funcionario que accede a la carrera mediante un proceso selectivo, normalmente mediante oposición y con oportunidad de obtener sucesivas promociones. Todo lo relativo a su posición jurídica, derechos y obligaciones está previsto en un pertinente estatuto que tendrá la consideración de norma jurídica, normalmente mediante ley. Es el Poder Ejecutivo, y no el Poder Judicial, el que vigilará el correcto cumplimiento de dicho estatuto. También corresponderá al Ejecutivo la correcta provisión de medios materiales y humanos a los Tribunales de Justicia para el desarrollo de sus funciones.

⁹ RON LATAS, R.P; LOUSADA AROCHENA, J.F., “Los consejos de la magistratura y otros modelos de gobierno judicial”. *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*. 2017. vol. 21. p. 300-313.

El predominante es el de elección partidista, a pesar de que el Plan Missouri aconseja la previsión de un trámite previo constituido por un examen realizado por una comisión no partidista integrada por jueces, juristas, abogados o ciudadanos no juristas que sugieren una terna, la cual deberá ser objeto de pronunciamiento por el Gobernador Federal en el plazo de un año.

¹⁰ MURILLO DE LA CUEVA, P.L., “El Gobierno del Poder judicial...” op.cit.

La particularidad de este sistema es que dota de un rango elevado de autonomía a los órganos de gobierno de los tribunales, lo que puede suponer que los jueces sean, a la vez, juzgadores y partes en el proceso y asuman tareas que, en principio, trascienden a la mera función jurisdiccional.

2.3. Modelo institucional.

El tercer modelo (institucional) es el que tenemos en España; aunque no hemos sido el primer país en implantarlo. Esta modalidad surgió en Francia e Italia al final de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de evitar presiones ajenas al Poder Judicial desde otras instituciones del Estado; siendo un modelo ampliamente aplicado en numerosos países de nuestro entorno y en algunos Estados de Latinoamérica.

Dentro de este modelo institucional se dan diversas variantes; dicho de otra forma, no existe un modelo institucional único.

2.3.1. El “Conseil Supérieur de la Magistrature”

El Conseil Supérieur de la Magistrature tiene su precedente¹¹ más remoto en el año 1883 cuando se configuró como un órgano dependiente del Poder Político, sin embargo con la **Constitución de 1946** se estableció como un ente de carácter constitucional; siendo posteriormente perfeccionado con el advenimiento de la Quinta República en el que se le iba a asignar un papel relativamente autónomo con respecto al poder ejecutivo.

Al respecto se han suscitado numerosos debates sobre la independencia¹² del CSM por dos motivos: el primero de ellos el tocante a la elección de sus miembros, ya que diez de los catorce vocales del organismo son nombrados por instituciones de carácter político (siendo dos de ellos nombrados por el Presidente de la República); el segundo de ellos sobre la dirección del organismo, ya que su presidencia le corresponde al morador del Palacio del Elíseo.

¹¹ RON LATAS, R.P; LOUSADA AROCHENA, J.F., “Los consejos de la magistratura...” op.cit

¹² SÁNCHEZ BARRIOS, M.I., *Las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial*. Salamanca. Tesitex. 1999.

El protagonismo político en el gobierno judicial no termina aquí. En este punto cabe destacar **el artículo 64 de la Constitución de la Quinta República**, que se expresa en los siguientes términos: “*Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire*”¹³.

El modelo francés experimentó una decisiva transformación en el año 1993. En este año la Constitución fue reformada y el Presidente de la República dejó de presidir el CSM; la vicepresidencia también dejaba de tener cáliz político, ya que dejaba de ser ocupada por el Ministro de Justicia. También con la reforma se estableció una composición dual formada por jueces y fiscales.

Con la reforma de 1993 se abrieron nuevas vías de comunicación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, constituyéndose el sistema desde un pluralismo institucional como clave de bóveda de los principios democráticos. Sin embargo se sigue percibiendo una cierta politización de la institución, al ser constitucionalmente un órgano auxiliar del Presidente de la República y al poder estar presente en sus reuniones el Ministro de Justicia, salvo para sustanciar cuestiones disciplinarias.

Esta reforma no fue todo lo ambiciosa que se esperaba¹⁴. Formalmente, el CSM sigue estando subordinado a la Presidencia de la República; la figura del Ministro de Justicia no ha visto reducidas sus atribuciones a mero espectador de las reuniones del organismo; tampoco se ha previsto que al Presidente del Conseil Constitutionnel (órgano análogo a nuestro TC) se le asigne la potestad de nombrar a la máxima autoridad del CSM.

Existe al respecto un informe publicado en 1995¹⁵ que establece muy claramente las competencias sobre el Poder Judicial del Ministro de Justicia. En dicho documento se explicita que el Ministro de Justicia, a través de la dirección de los servicios judiciales, conserva muchas de sus atribuciones originarias de índole administrativo, además de las relativas a la formación, selección y ascenso de los jueces.

¹³ En español: “El Presidente de la República es el garante de la independencia de la autoridad judicial”. Tanto la versión original como la traducción están disponibles en www.senat.fr

¹⁴ MURILLO DE LA CUEVA, P.L. “El Gobierno del Poder judicial: los modelos”... op.cit.

¹⁵ Raport Annuel 1995. Disponible en: <https://data.bnf.fr/>

2.3.2. El “Consiglio Superiore della Magistratura”.

El *Consiglio* italiano fue creado en 1907, por la ley de 14 de julio de 1907, no. 511. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial se decidió que era necesario introducirlo en la nueva Constitución, promulgada en 1947. Su composición se regula en el artículo 104 de la Norma Suprema italiana con las siguientes palabras:

"La Magistratura constituye un orden autónomo e independiente de cualquier otro poder. El Consejo Superior de la Magistratura estará presidido por el Presidente de la Republica.

Formaran parte de él, como miembros natos, el primer Presidente y el Fiscal General del Tribunal Supremo.

Los demás componentes serán elegidos en sus dos tercios por la totalidad de los magistrados ordinarios entre los pertenecientes a las diversas categorías, y en un tercio por el Parlamento en sesión conjunta entre catedráticos titulares de Universidad en materias jurídicas y abogados con quince años de ejercicio.

El Consejo elegirá un vicepresidente entre los componentes designados por el Parlamento.

Los miembros electivos del Consejo permanecerán en el cargo cuatro años y no serán inmediatamente reelegibles.

No podrán, mientras permanezcan en el cargo, estar inscritos en los registros profesionales ni formar parte del Parlamento o de un Consejo Regional”.

Cabe decir que a lo largo de los años se ha ido modificado la composición y la forma de elección de los Vocales del Consejo, si bien debiendo respetar siempre a los miembros natos del órgano (Presidente de la República, el Presidente del Tribunal Supremo y el Fiscal General del Tribunal Supremo), los cuales serán inamovibles.

La última reforma data del año 2002¹⁶, en la que se modificó la composición y modalidad de elección, por medio de la Ley 44/2002 de 28 Marzo. Con esta reforma los miembros

¹⁶ SÁNCHEZ BARRIOS, M.I., *La elección de los miembros...* op.cit

del *Consiglio* se sitúan en veintisiete: dieciséis provenientes de la Carrera Judicial, ocho juristas, y los tres miembros natos.

El órgano de gobierno judicial italiano se establece como un órgano de gobierno autónomo de la magistratura. A este se le atribuyen, como a su homólogo español, los nombramientos, ascensos, traslados, y las medidas disciplinarias de los Jueces y Magistrados.

También se le asignan competencias para adoptar actos de naturaleza paranormativa que pueden agruparse, siguiendo a RON LATAS Y LOUSADA AROCHENA¹⁷ en tres categorías: reglamento interno y reglamento de administración y contabilidad, que son actos de normativos que se le reconocen a todo órgano político que es constitucionalmente decisivo; reglamento para las prácticas de los auditores judiciales, los cuales se ocupan de formar a los Magistrados en prácticas; y la circulares, que regulan diversos aspectos relacionados con la discrecionalidad administrativa que se le reconoce al *Consiglio*.

3. INDEPENDENCIA JUDICIAL.

“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.” Declaración Universal de los DD.HH.

¹⁷ RON LATAS, R.P; LOUSADA AROCHENA, J.F., “Los consejos de la magistratura...” op.cit

3.1.La independencia judicial en la doctrina.

La independencia judicial es, según BUSTOS GISBERT¹⁸ citando a ALEXY, “por una parte un mandato que ordena la máxima realización de un objetivo organizativo o institucional: la separación del poder judicial del resto de poderes en ejercicio de sus funciones; por otra un mandato que ordena la máxima realización de un derecho fundamental: la garantía de un juicio justo en cuanto procede de una persona o grupo absolutamente independiente e imparcial”. Estas dos finalidades están condicionadas de forma mutua. No obstante, expresa BUSTOS GISBERT, que debido a la distinta naturaleza a la que responden, según la aproximación al concepto desde diversas perspectivas, preponderarán unos aspectos sobre otros.

Para ROA ROA no existe una definición concreta de independencia judicial¹⁹, sino que esta consiste en un estudio sobre la existencia o no de determinados factores que determinaran la existencia o inexistencia de independencia judicial. Esta dependería de, por ejemplo, una correcta equivalencia entre los instrumentos procesales, institucionales y subjetivos que amparan a los jueces y aquellos entes que les puedan reclamar responsabilidades por su actuación.

Así las cosas la independencia judicial puede calificarse como un “principio en tensión”²⁰, en el cual la voluntad del juez en no dejarse corromper resulta fundamental.

Solamente a partir de esta premisa individual se puede garantizar que el juez siga el proceso acorde con lo que dicta el ordenamiento jurídico y se respeten las garantías procesales de las partes.

¹⁸ BUSTOS GISBERT, R., “La Independencia Judicial en Europa”. *Independencia Judicial y Estado Constitucional : el estatuto de los jueces* . Valencia: Tirant lo Blanch 2006, pp. 81-109.

¹⁹ ROA ROA, J.E., “La Independencia de la Corte Constitucional de Colombia y la acción pública de constitucionalidad”, *Independencia Judicial y Estado Constitucional : el estatuto de los jueces* . Valencia: Tirant lo Blanch 2006, pp. 81-109

²⁰ MURILLO DE LA CUEVA, P.L., “La independencia y el gobierno de los jueces. Un debate constitucional”. *Teoría y Realidad Constitucional*, no. 40, 2017, pp. 351-368.

Existen diferentes consideraciones doctrinales acerca de las facetas que puede asumir la independencia judicial. BALLESTER CARDELL²¹, citando al Profesor LOEWENSTEIN, distingue entre independencia personal e independencia funcional. La primera de ellas implica que el juez no será destituido o separado de la función jurisdiccional salvo incumplimiento grave de sus funciones; la segunda significa que el juez, en su tarea de aplicar la ley al caso concreto, no se dejará llevar por presiones externas que provengan de los demás poderes del Estado, de los medios de comunicación, o de la ciudadanía (lo que se conoce como independencia exterior), ni tampoco por las que puedan dirigirse desde los propios justiciables.

También se hace referencia a la independencia institucional u orgánica, la que permite entender el Poder Judicial como una pieza de referencia en el engranaje de un Estado de Derecho; y de la independencia objetiva, la cual hace alusión al concreto ejercicio de la actividad jurisdiccional, cuya realización únicamente compete a los jueces y magistrados.

3.2.La independencia judicial en la historia.

Ni mucho menos la experiencia histórica contribuye a crearnos una idea de justicia independiente e incorruptible frente a todo y todos; al contrario, es un logro que paulatinamente se ha ido construyendo no sin sobresaltos, sin mencionar la cantidad de episodios regresivos a tal fin que hemos vivido en los últimos siglos sino décadas.

Si hablamos estrictamente de independencia judicial en los Estados Modernos debemos poner como punto de partida la Revolución Gloriosa. Esta revolución supuso el derrocamiento de Jaime II y en teoría la subida al trono de Inglaterra de Guillermo III; finalmente este renunciaría por falta de apoyos entre sus partidarios.

Los logros de la Gloriosa se plasmaron en la llamada *Act of Settlement* (1701), la cual no solo contaba entre su articulado con disposiciones trascendentales acerca de la sucesión a la Corona, sino que también ponía las bases de la independencia judicial dotando a los jueces de inamovilidad en el ejercicio de sus funciones, de un sueldo fijo y decretando el

²¹ BALLESTER CARDELL, M. “El papel del Consejo General del Poder Judicial en defensa de la independencia de los Jueces”. *El poder judicial: VI Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España*. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009. p. 117-154.

carácter vitalicio de su condición de juez. Sin embargo, esta inamovilidad e independencia cesaban en el momento de la muerte o sucesión del Rey en el trono.

Esta reforma normativa no establecía por sí sola la independencia de los jueces y magistrados, sino que se les dotaba de una serie de garantías para liberarles de forma definitiva de presiones provenientes del poder monárquico.

Otro caso que resulta pertinente analizar es el de Francia y su etapa revolucionaria. Hasta el año 1789 en el Reino de Francia la tiranía y arbitrariedad absolutista era el único fundamento de lo que por aquel entonces se consideraba legalidad. La función jurisdiccional y el poder real prácticamente se solapaban y se confundían sin ningún tipo de rubor.

Autores como Montesquieu, Rousseau o Voltaire inspiraron²² la que sería conocida como **Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano** (1789), elaborada una vez que la monarquía ya no disponía del poder omnímodo de antaño. Es en este texto donde se empiezan a poner las bases de la moderna independencia judicial. En efecto, en su artículo 16 se expone lo siguiente: « *Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution* »²³. La Declaración sirvió como punto de partida inspirador de las modernas democracias liberales de nuestra época en cuanto a separación de poderes, soberanía nacional, libertades y derechos fundamentales, e imperio de la ley.

El caso francés tuvo influencia en la España de 1812 con una realidad contradictoria. A la par que se tenía en consideración el modelo napoleónico de justicia, se esforzaba por depurar de la Administración del Estado de aquellas personalidades afines a la ocupación napoleónica y la rehabilitación de los jueces más favorables a las instituciones del Antiguo Régimen. En las Cortes de Cádiz la necesidad de implantar el nuevo sistema constitucional provocó, según LÓPEZ BOFILL²⁴, que se centrara la atención en la

²² PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., “Los derechos del hombre en 1789: reflexiones en el segundo centenario de la Declaración Francesa.” 1989.

²³ Traducido al español: “Una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de poderes, carece de Constitución”. Disponible en <https://www.conseil-constitutionnel.fr/es/declaracion-de-los-derechos-del-hombre-y-del-ciudadano-de-1789>

responsabilidad del juzgador dejando de lado otros aspectos como su independencia o inamovilidad. Así las cosas únicamente existía un artículo de la Constitución (el 252) que impedía la destitución arbitraria de un juez del ejercicio de sus funciones; mientras que el 253 y siguientes²⁵ advertían a los jueces sobre las consecuencias en caso de sobornos o prevaricación.

El término independiente no se une al de juez hasta la proclamación de la Constitución de la Segunda República²⁶ en el año 1931, después de previos intentos en el último tercio del siglo XIX.

3.3.El papel del CGPJ en la independencia judicial.

Si hablamos de nuestro país podemos observar que la independencia judicial se enuncia como *desideratum* en el **artículo 117.1 de nuestra Constitución**²⁷. Se admite en este artículo que, sin imperio de la ley y sin un sistema judicial incólume ante las presiones no hay sistema democrático posible. Se establece este artículo como requisito fundamental, pero a la vez complejo²⁸; comprende varios matices como son la exclusividad de la función jurisdiccional y la no atribución de una serie de labores que no sean las estrictamente jurisdiccionales. También se garantiza la independencia de los jueces y magistrados mediante las figuras de la abstención y la recusación.

Las referencias legales a la debida independencia de los jueces y magistrados no acaban ahí. Por ejemplo, en el **artículo 12 de la LOPJ** se enuncia que en el ejercicio de la

²⁴ LÓPEZ BOFILL, H., “Reflexiones sobre los orígenes de la Independencia Judicial”. *Independencia Judicial y Estado Constitucional: el estatuto de los jueces*. Valencia: Tirant lo Blanch 2006, pp. 81-109

²⁵ El artículo 254 de la Constitución de 1812 prescribe: “*Toda falta de observancia de las leyes que arreglan el proceso en lo civil y en lo criminal, hace responsables personalmente a los jueces que la cometieren*”.

²⁶ El artículo 94 expone: “*Los jueces son independientes en su función. Solo están sometidos a la ley*”.

²⁷ Se puede contemplar como los valores enunciados por primera vez en 1789 inspiran nuestro ordenamiento jurídico: “*La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley*”. (art. 117.1 de la CE)

²⁸ AROZAMENA SIERRA, J., “Sistema Español de Función Judicial. La Carrera Judicial.” *Documentación Administrativa*, no. 210-211, 1987.

potestad jurisdiccional los jueces y magistrados gozan de independencia frente al resto de órganos jurisdiccionales y del CGPJ.

En su apartado segundo se prohíbe a los jueces y a los tribunales enmendar la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico realizada por los que se encuentren por debajo en la estructura jerárquica; salvo cuando “administren justicia” en virtud de los recursos legalmente establecidos. La idea de jerarquía tiene un sentido diferente al establecido en **el 103.1 de la Constitución** referido a la actividad de las Administraciones Públicas. El órgano jurisdiccional jerárquicamente superior no posee la potestad de invalidar o anular la resolución del órgano inferior salvo en los casos en que sea pertinente el recurso procesal.

Finalmente, en su apartado tercero se impide también a jueces y tribunales y al órgano de gobierno del Poder Judicial dictar instrucciones a sus inferiores, de carácter general o particular, en torno a la eventual aplicación o interpretación del Derecho que realicen en ejercicio de su labor jurisdiccional. Si, como hemos dicho anteriormente, el juez únicamente está sometido incondicionalmente al imperio de la ley, no parecería razonable (mucho menos admisible) que el órgano jurisdiccional jerárquicamente superior le imponga coactivamente instrucciones de cualquier tipo, ni tampoco que el juez o magistrado jerárquicamente inferior se dejase guiar por ellas. Estaríamos, al contrario, ante un acto contrario a la ley y sobre el que recae la nulidad más absoluta²⁹.

El artículo 14.1 de la LOPJ otorga a los jueces y magistrados un instrumento al respecto: *“Los Jueces y Magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia lo pondrán en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, dando cuenta de los hechos al Juez o Tribunal competente para seguir el procedimiento adecuado, sin perjuicio de practicar por sí mismos las diligencias estrictamente indispensables para asegurar la acción de la justicia y restaurar el orden jurídico”*. El apartado segundo también atribuye al Ministerio Fiscal las acciones que estime pertinentes para asegurar una actuación independiente del juez. Este artículo viene a reseñar que, tanto jueces como magistrados deben dirigirse al órgano de gobierno del Poder Judicial cuando sean objeto de algún tipo de perturbación en el ejercicio de sus

²⁹ AROZAMENA SIERRA, J. “Sistema Español”... op. cit.

funciones jurisdiccionales. El Consejo deberá actuar de manera pertinente y deberá llevar a cabo cualesquiera acciones que se requieran para restaurar la situación y así garantizar el correcto funcionamiento de la labor jurisdiccional y la independencia que se le presupone.

No es esta la única garantía de la que gozan los jueces y magistrados para el correcto ejercicio de la función jurisdiccional. Existen en nuestro ordenamiento sanciones concretas que se imponen a los jueces o magistrados que intenten entrometerse en la función jurisdiccional de otro. **El artículo 417.4 de la LOPJ** considera “falta muy grave”: *“La intromisión, mediante órdenes o presiones de cualquier clase, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otro juez o magistrado”*, conllevando una sanción consistente en la separación de la carrera judicial, traslado forzoso o suspensión. De igual manera existen otro tipo de sanciones calificadas como “graves”; así las cosas *“Corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico hecha por los inferiores en el orden jurisdiccional, salvo cuando actúen en el ejercicio de la jurisdicción”* (art.418.4), siendo este tipo de conductas sancionadas con multa y la tramitación de un procedimiento establecido en el artículo 425. La potestad para conocer de estas cuestiones e imponer las consecuencias pertinentes se atribuye al CGPJ.

En resumidas cuentas, el CGPJ responde a la voluntad del constituyente español de modernizar y democratizar el Poder Judicial y que actúe como garante de la independencia judicial. Con este sistema se deja en manos de un órgano ajeno al Poder Ejecutivo, el gobierno de la Judicatura y el poder decisorio sobre el estatuto de los Jueces y Magistrados.

El papel del CGPJ en la independencia se confirma en la STC 108/1996³⁰ con estas palabras: *“Así, las funciones que obligadamente ha de asumir el Consejo son aquellas que más pueden servir al Gobierno para intentar influir sobre los Tribunales: de un lado, el posible favorecimiento de algunos Jueces por medio de nombramientos y ascensos; de otra parte, las eventuales molestias y perjuicios que podrían sufrir con la inspección y la imposición de sanciones. La finalidad del Consejo es, pues, privar al Gobierno de esas funciones y transferirlas a un órgano autónomo y separado”*.

³⁰ STC 108/1986, de 29 de julio (FJ 7).

Con la creación del CGPJ se asume que el control del Poder Ejecutivo sobre el Judicial ya ha acabado, precisamente porque uno de los caracteres que se le atribuye a este órgano es la neutralidad ideológica, al menos formalmente; si bien en los últimos años se han producido actuaciones esperpénticas que han puesto en cuestión la independencia judicial y el propio papel del CGPJ, entre las cuales destaca sobremanera la entusiasta afirmación del Senador del PP Ignacio Cosidó que, ante el pacto de renovación del Poder Judicial suscrito por socialistas y populares, se lanzó a escribir por mensaje privado de WhatsApp al Grupo Parlamentario Popular del Senado lo siguiente: “Controlaremos desde detrás la Sala Segunda”³¹, ante la realidad más que probable del nombramiento de Manuel Marchena como Presidente del CGPJ. Finalmente, el escándalo provocó la renuncia de Marchena a ocupar el puesto que se le quería asignar y el severo deterioro de la imagen pública del senador.

Aún así y poniendo en valor la postura del Magistrado, se ha demostrado a lo largo de más de 40 años que el CGPJ, con sus virtudes y sus defectos, ha servido de forma fructífera a la efectiva separación de poderes y a la legitimación democrática de la Justicia

3.4.Concreciones de la independencia judicial.

La LOPJ tiene un apartado sito en el Título II del Capítulo IV denominado “De la independencia judicial” que abarca desde los artículos 378 a 404. De estos artículos subyacen una serie de garantías: independencia económica, inmunidad judicial e inamovilidad³².

La independencia económica está prevista en los artículos 402 a 404 de la LOPJ. Esta concede a los miembros de la judicatura la facultad de ser retribuidos en correspondencia con la altura de su función; igualmente extiende la protección derivada de la Seguridad Social a sus familiares durante todo su servicio y posteriormente a su jubilación. Se

³¹https://www.elplural.com/politica/cosido-pillado-en-whatsapp-controlaremos-desde-detras-la-sala-segunda_206595102

³² Guías Jurídicas Wolters Kluwer. Disponible en: https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUmJxMjtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAkVHy_zUAAAA=WKE - I5

presupone que un juez adecuadamente retribuido es menos proclive a soportar presiones ajenas.

La inmunidad de los jueces y magistrados se regula en los artículos 398 a 400 de la LOPJ. Con esta garantía se trata de proteger al juez ante eventuales presiones que puedan condicionar su actuación, vengan del poder político o de otras instancias jurisdiccionales, con el ánimo de preservar la dignidad de la función judicial. La inmunidad judicial implica que los jueces y magistrados solo podrán ser detenidos por orden judicial en caso de ser hallados in fraganti cometiendo un hecho delictivo. De la detención se informará rápidamente al Presidente del Tribunal o Audiencia de la que el juez dependa, los cuales realizarán las diligencias oportunas para la sustitución del juez detenido.

3.5. Inamovilidad y responsabilidad de los jueces y magistrados.

Como expresó MONTERO RÍOS, *“Si queréis, pues, conservar la inamovilidad, velad, vosotros mismos incesantemente por el cumplimiento de la responsabilidad judicial, anticipándoos al ciudadano, que podrá ejercer la acción popular que la Constitución le reconoce. No sacrificéis el porvenir de la institución ante las conveniencias del individuo porque tanto más se arraigará en el país la preciosa garantía que hoy disfrutáis cuanto más severos seáis en el cumplimiento de deberes. Una Magistratura es tanto más inamovible cuanto es más responsable.”*³³

La inamovilidad es una de las garantías por excelencia de la que disponen jueces y magistrados; pero a la vez no son los únicos que gozan de ella. En España se reconoce la inamovilidad a los funcionarios de carrera, esto es, los que han obtenido su plaza mediante los procesos selectivos habituales, siendo más común el de la oposición. La condición de inamovible implica que los funcionarios no pierden tal estatus salvo por circunstancias previstas en la legislación, siendo la inamovilidad producto y consecuencia directa de la independencia que se les presupone a jueces y magistrados como responsables de la función jurisdiccional.

³³ MONTERO RÍOS, E., “Discurso leído por el Excmo. Sr. D. Eugenio Montero Ríos en la solemne apertura de los tribunales, celebrada en 15 de septiembre de 1870”, *Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia*, Madrid, 1870

El TC, en su sentencia 204/1994, delimita el concepto de inamovilidad; razona que un magistrado no puede ser removido de su puesto sino en concordancia con causas legalmente delimitadas³⁴.

Inamovilidad no implica perpetuidad en el desempeño del cargo público. Este derecho no tiene carácter absoluto, al contrario puede ser objeto de modificación por parte del legislador, que está habilitado para establecer limitaciones a la duración de los cargos judiciales (el art. 117.2 CE reconoce el derecho de los Jueces a no ser separados, suspendidos, trasladados, ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley). En este punto el poder legislativo también debe establecer un juicio de proporcionalidad en los casos donde esté en juego la separación de la carrera judicial, teniendo en cuenta las exigencias que impone el principio de separación de poderes.

Así las cosas, la jurisprudencia constitucional establece la relación entre inamovilidad y responsabilidad, en sus facetas penal y disciplinaria. La atribución de responsabilidades de diverso tipo al juez o magistrado puede conllevar situaciones como el traslado (inamovilidad relativa) o la separación de la carrera.

Hasta 2015 los Jueces estaban sujetos también a responsabilidad civil. Sin embargo, esta desapareció con la LO 7/2015 de 1 de julio, por la que se modifica la LO 6/1985 del Poder Judicial, derogando así los artículos 411 a 413 de la LOPJ.

El traslado es una de las sanciones que se contemplan para supuestos de faltas muy graves. Sin embargo no todo traslado tiene connotación negativa, ya que puede ser consecuencia de la promoción, elemento inseparablemente relacionado con la misma carrera judicial.

La separación comporta la pérdida de la condición de juez o magistrado. Se trata de una sanción de carácter disciplinario, o consecuencia de una sentencia en el ámbito penal como condena principal o accesoria. También se produce por incapacidad sobrevenida;

³⁴ STC 204/1994, de 11 de julio (FJ 10): “Inamovilidad significa, con arreglo a su acepción general, que, nombrado o designado un Juez o Magistrado conforme a su estatuto legal no puede ser removido del cargo sino en virtud de causas razonables tasadas o limitadas y previamente determinadas.”

cuando esta cesa se permite la restitución del juez o magistrado mediante la institución de la rehabilitación.

4. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CGPJ.

La regulación de esta materia se puede delimitar de una forma más o menos precisa con una estructura coherente formada por instancias cuyas competencias aparecen disciplinadas en la LOPJ.

Se debe hacer referencia al **artículo 595 de la Ley Orgánica del Poder Judicial**, que abre el **Título IV, titulado "De los órganos del Consejo General del Poder Judicial"**. Este artículo tiene dos apartados que enuncian lo siguiente:

"1. Además de las funciones encomendadas a la Presidencia, el Consejo General del Poder Judicial ejerce sus atribuciones en Pleno o a través de las Comisiones previstas en esta Ley Orgánica.

*2. En el Consejo General del Poder Judicial existirán las siguientes Comisiones: Permanente, Disciplinaria, De Asuntos Económicos y De Igualdad."*³⁵

Este artículo obvia referencia alguna a la Vicepresidencia, la cual se encuentra regulada en **los artículos 589 y ss. de la LOPJ**. Además, este precepto debe ser complementado con **el artículo 611** de la citada norma legal, el cual nos presenta los órganos técnicos adscritos al CGPJ:

"1. El Consejo General del Poder Judicial dispondrá de los órganos técnicos que sean necesarios para el correcto ejercicio de sus atribuciones, con el cometido de tramitar y preparar los asuntos de que hayan de conocer el Pleno y las Comisiones.

(...)

³⁵ La Comisión Permanente se regula en los artículos 601 y 602 de la LOPJ, la Comisión Disciplinaria y el Promotor de la Acción Disciplinaria en los artículos 603 a 608, la Comisión de Asuntos Económicos hace lo propio en el artículo 609, y la Comisión de Igualdad en el 610.

4. *En particular, serán órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial la Secretaría General, el Servicio de Inspección, el Gabinete Técnico, la Escuela Judicial, el Centro de Documentación Judicial y la Oficina de Comunicación.*”

4.1.Presidencia del CGPJ.

La ostentación de la Presidencia del CGPJ conlleva la asunción del cargo de Presidente del TS. Sus funciones se encuentran delimitadas en **el artículo 598** y se pueden clasificar en representativas, propositivas, orgánicas y directivas:

Así, forman parte de las competencias **representativas** la de *ostentar la representación del Consejo General del Poder Judicial* (art. 598.1), *“dirigir la comunicación institucional”* (art. 598.8); las **propositivas** versan sobre la facultad de *“proponer al pleno y a la comisión permanente las cuestiones que estime oportunas en materia de la competencia de éstos”* (art. 598.4), *“proponer el nombramiento de ponencias para preparar la resolución o despacho de un asunto”* (art. 598.5), *“proponer al pleno el nombramiento del Vicepresidente del Tribunal Supremo, del Secretario general y del Vicesecretario General, así como, en los dos últimos casos, acordar su cese”* (art. 598.11) y *“realizar la propuesta del Magistrado, de las Salas Segunda o Tercera del Tribunal Supremo, competente para conocer de la autorización de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución, así como del Magistrado de dichas Salas del Tribunal Supremo que le sustituya en caso de vacancia, ausencia o imposibilidad”* (art. 598.9); entre las **orgánicas** *“nombrar y cesar al Director del Gabinete de la Presidencia y al Director de la Oficina de Comunicación, así como al personal eventual al servicio del Presidente”*; y, por último, las **directivas**, consistentes en *“convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente, decidiendo los empates con voto de calidad”* (art. 598.2), *“autorizar con su firma los acuerdos del Pleno y de la Comisión Permanente”* (art. 598.6), *“ejercer la superior dirección de las actividades de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial”* (art. 598.7) y *“encargar cometidos a vocales concretos o a grupos de trabajo siempre que este encargo no tenga carácter permanente ni indefinido”* (art. 598.12).

4.2.Comisión de Igualdad.

La Comisión de Igualdad fue creada el 25 de Abril del 2007³⁶ por unanimidad del Pleno del CGPJ, siguiendo la Disposición Adicional Tercera de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Sus funciones aparecen delimitadas en el **artículo 610 de la LOPJ**³⁷. Será labor de la Comisión orientar al Pleno del Consejo sobre las medidas pertinentes para materializar el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el seno del CGPJ. También realizará los informes previos sobre el impacto de género y sugerir iniciativas para renovar los parámetros de igualdad en la Judicatura.

Por otro lado, esta Comisión se encargará también de analizar la respuesta judicial en asuntos de violencia de género y doméstica.

4.3.Comisión de Asuntos Económicos.

Los Vocales de esta Comisión también serán tres, elegidos por el Pleno del CGPJ, y de los cuales se designará a un Presidente.

La Comisión de Asuntos Económicos aparece regulada en el **artículo 609 de la LOPJ**³⁸. Sus funciones son eminentemente financieras, entre ellas se encuentra la de realizar

³⁶<https://www.europapress.es/nacional/noticia-cgpi-crea-comision-igualdad-formaran-dos-unicas-mujeres-son-vocales-20070425172401.html>

³⁷ “4. Corresponderá a la Comisión de Igualdad asesorar al Pleno sobre las medidas necesarias o convenientes para integrar activamente el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial y, en particular, le corresponderá elaborar los informes previos sobre impacto de género de los Reglamentos y proponer medidas para mejorar los parámetros de igualdad en la carrera judicial.

5. Asimismo corresponderá a la Comisión de Igualdad el estudio y seguimiento de la respuesta judicial en materia de violencia doméstica y de género, sirviéndose para ello del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género o de cualquier otro instrumento que se pueda establecer a estos efectos”. (arts. 610.4 y 610. 5)

³⁸ “1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elegirá anualmente a los Vocales integrantes de la Comisión de Asuntos Económicos y, de entre ellos, designará a su Presidente.

2. La Comisión de Asuntos Económicos estará integrada por tres Vocales.

3. La Comisión de Asuntos Económicos deberá actuar con la asistencia de todos sus componentes.

4. Corresponde a la Comisión de Asuntos Económicos la realización de estudios y proyectos de carácter económico y financiero que le sean encomendados por el Pleno del Consejo, el control de la actividad financiera y contable de la gerencia y aquellas otras que resulten necesarias para el correcto desempeño de las funciones del Consejo General del Poder Judicial en materia económica. (art. 609).

proyectos de naturaleza económica, el control de la actividad contable y de aquellas que resulten decisivas para el buen funcionamiento del Consejo en materia financiera.

Adicionalmente, podrán elaborar el borrador del proyecto presupuestario del CGPJ, si así se lo delega la Comisión Permanente, la cual deberá aprobarlo en todo caso antes de ser remitido al Pleno.

4.4.Comisión Disciplinaria.

Esta Comisión está formada por siete vocales, procedentes cuatro del turno judicial y tres del turno de juristas de reconocida competencia.

Sus funciones aparecen reguladas en el artículo 604 de la LOPJ³⁹. A la Comisión Disciplinaria se le atribuye la resolución de los expedientes disciplinarios planteados por infracciones graves y muy graves y aplicar las sanciones pertinentes, salvo que la sanción consistiera en la separación de la carrera judicial. Su competencia también se extenderá a los recursos de alzada que se interpongan contra las resoluciones sancionadoras dictadas por los órganos de gobierno interno de los Tribunales.

4.5.Comisión Permanente.

La Comisión Permanente está compuesta por ocho personas. Esta Comisión está presidida por el Presidente del CGPJ y siete vocales: cuatro procedentes del turno de Jueces y Magistrados y tres del turno de juristas de reconocida competencia.

5. Asimismo, la Comisión Permanente podrá delegar en la Comisión de Asuntos Económicos la elaboración del borrador de proyecto del presupuesto anual del Consejo, cuya aprobación corresponderá, en todo caso, a la Comisión Permanente antes de su elevación al Pleno”. (art. 609)

³⁹ “1. A la Comisión Disciplinaria compete resolver los expedientes disciplinarios incoados por infracciones graves y muy graves e imponer, en su caso, las sanciones que correspondan a Jueces y Magistrados, con la sola excepción de aquellos supuestos en que la sanción propuesta fuere de separación del servicio.

2. Los acuerdos sancionadores de la Comisión Disciplinaria a los que se refiere el número anterior serán recurribles, en el plazo de un mes, en alzada ante el Pleno.

3. La Comisión Disciplinaria conocerá igualmente de los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones sancionadoras de los órganos de gobierno interno de los Tribunales”. (art. 604)

Sus competencias se enumeran el artículo 602 de la LOPJ⁴⁰. A esta Comisión se le atribuyen el ejercicio de todas aquellas funciones del CGPJ que no estén expresamente asignadas por la Ley Orgánica al Pleno, a la Comisión Disciplinaria, a la Comisión de Igualdad o a la Comisión de Asuntos Económicos.

5. FUNCIONES DEL CGPJ.

Las atribuciones de este órgano vienen recogidas en el **Título I del Libro VIII titulado “De las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial”**. Este Título comprende **los artículos 558 a 565 de la LOPJ**.

Primeramente, en el **artículo 558 de la LOPJ** se asume la vinculación del órgano de gobierno judicial en el cumplimiento del principio de legalidad, y se designa su sede en la ciudad de Madrid.

En el **artículo 559** se le atribuye al CGPJ el mando centralizado en el ejercicio de las competencias gubernativas al CGPJ.

En **los artículos 560 a 562** se detallan, una a una, distintas atribuciones asumidas por el CGPJ, que engloban una gran cantidad de áreas de acción. Así las cosas, por ejemplo, tienen atribuciones de índole propositiva: “*Proponer el nombramiento, en los términos*

⁴⁰ “1. A la Comisión Permanente compete:

- a) Preparar las sesiones del Pleno de conformidad con el plan de trabajo y las directrices que este establezca.
- b) Velar por la exacta ejecución de los acuerdos del Pleno del Consejo.
- c) Decidir aquellos nombramientos de jueces y magistrados que, por tener carácter íntegramente reglado, no sean de la competencia del Pleno, acordar la jubilación forzosa por edad de los mismos y resolver sobre su situación administrativa.
- d) Informar, en todo caso, sobre los nombramientos de jueces y magistrados de la competencia del Pleno, que deberá fundarse en criterios objetivos y suficientemente valorados y detallados. Para la adecuada formación de los criterios de calificación de los jueces y magistrados, la Comisión podrá recabar información de los distintos órganos del Poder Judicial.
- e) Resolver sobre la concesión de licencias a los jueces y magistrados, en los casos previstos por la ley.
- f) Preparar los informes sobre los anteproyectos de ley o disposiciones generales que se hayan de someter a la aprobación del Pleno.
- g) Autorizar el escalafón de la Carrera Judicial.
- h) Ejercer cuantas competencias le sean delegadas por el Pleno o le fueren atribuidas por la ley.” (art.602.1)

previstos por la presente Ley Orgánica, del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial” (art. 560.1.1ª); directiva: *“Impartir instrucciones a los órganos de gobierno de Juzgados y Tribunales en materias de la competencia de éstos, así como resolver los recursos de alzada que se interpongan contra cualesquiera acuerdos de los mismos” (art. 560.1.9ª);* orgánica: *“Resolver lo que proceda en materia de formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas y régimen disciplinario de Jueces y Magistrados” (art. 560.1.7ª);* o consultiva: *“Se someterán a informe del Consejo General del Poder Judicial los anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre las siguientes materias: Modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial” (art. 561.1.1ª).*

Igualmente ostenta, junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, competencias en materia de cooperación jurisdiccional internacional (**art.562**); y tiene que remitir una memoria anual a Congreso y Senado donde detalle el funcionamiento y la situación general de Juzgados y Tribunales, y proponga, si es necesario, medidas para mejorar la capacidad de trabajo de los órganos jurisdiccionales y de su personal adjunto. Esta memoria deberá incluir una referencia al impacto de género en la actividad judicial, y podrá ser objeto de debate en las Cortes Generales (**art. 563.1, 563.2, y 563.3**).

Finalmente, el artículo 565 en sus tres apartados señala que el CGPJ deberá elaborar su presupuesto de acuerdo con la legislación presupuestaria, cuyo control corresponderá a la Administración, y respetando los principios de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria.

A lo largo de estos cuarenta y dos años de régimen constitucional se han ido modificando algunas de las atribuciones del CGPJ. Comparativamente, nuestro órgano de gobierno judicial tiene más competencias y más autonomía que algunos de sus homólogos extranjeros. Sin embargo, apunta SÁNCHEZ BARRIOS⁴¹ que se debería procurar conseguir unas atribuciones más adecuadas y amplias para lograr una verdadera independencia judicial, aunque también afirma que si no cambia la forma de elección de los Vocales no tiene sentido pedir para el Consejo un número mayor de atribuciones.

⁴¹ SÁNCHEZ BARRIOS, M.I., *Las atribuciones del...* op.cit.

6. COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN DE LOS VOCALES.

Sobre la composición del Consejo General del Poder Judicial tenemos referencias en la **Constitución**, concretamente en su **artículo 122.3**: *“El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”*.

Veamos a continuación, por un lado, los aspectos referentes a su composición mixta y, por otro, lo relativo a la forma de elección de sus miembros.

6.1.Composición.

Del artículo 122.3 se saca en claro que el peso dominante en el CGPJ lo llevarán los Jueces y Magistrados, puesto que constituirán 3/5 del total de los vocales del órgano. A su vez, los 2/5 asientos restantes serán asignados a juristas de reconocida competencia.

El consenso de los constituyentes en cuanto a la composición del CGPJ fue unánime en cuatro cuestiones según señala GERPE LANDÍN⁴²: la decisión por el heterogobierno; la composición del órgano por profesionales del Derecho; la composición mixta del mismo; el nombramiento por el Congreso de los Diputados de aquellos vocales ajenos a la magistratura; la Presidencia del CGPJ encargada al Presidente del Tribunal Supremo, nombrado tras propuesta del propio órgano.

Sin embargo, en el Anteproyecto de Constitución formaciones políticas como UCD manifestaron sus reservas a aspectos concretos sobre este modelo compositivo, llegando a proponer uno diferente formado por quince miembros de los cuales diez, fueran jueces

⁴² GERPE LANDÍN, M., *La composición del Consejo General del Poder Judicial*. Revista del Centro de Estudios Constitucionales, 1991, no 9, p. 145-174.

y magistrados y cinco, juristas de reconocida competencia. Además, existieron otras propuestas⁴³ procedentes de diferentes partidos políticos que preveían un número menor de vocales y un mayor desequilibrio en el peso de jueces y magistrados con respecto a los juristas de reconocido prestigio.

El TC, por su parte ha avalado en su jurisprudencia esta composición mixta del CGPJ en su sentencia 108/1986⁴⁴ en estos términos: *“La Constitución obliga, ciertamente, a que doce de sus Vocales sean elegidos “entre” Jueces y Magistrados de todas las categorías, mas esta condición tiene como principal finalidad que un número mayoritario de Vocales del Consejo tengan criterio propio por experiencia directa sobre los problemas que los titulares de los órganos judiciales afrontan en su quehacer diario, de la misma forma que, al asignar los restantes ocho puestos a Abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión, se busca que aporten su experiencia personas conocedoras del funcionamiento de la justicia desde otros puntos de vista distintos del de quienes la administran”*. Igualmente añade: *“El fin perseguido es, de una parte, el de asegurar la presencia en el Consejo de las principales actitudes y corrientes de opinión existentes en el conjunto de Jueces y Magistrados en cuanto tales, es decir, con independencia de cuales sean sus preferencias políticas como ciudadanos y, de la otra, equilibrar esta presencia con la de otros juristas que, a juicio de ambas Cámaras, puedan expresar la proyección en el mundo del Derecho de otras corrientes de pensamiento existentes en la sociedad. La finalidad de la norma sería así, cabría afirmar de manera resumida, la de asegurar que la composición del Consejo refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno del Poder Judicial”*.

Cabe aclarar que los magistrados del TC no pueden ser nombrados simultáneamente vocales del CGPJ, puesto que no pueden ser considerados miembros en servicio activo, por no desempeñar funciones jurisdiccionales, de acuerdo a lo desarrollado en **el artículo**

⁴³ SÁNCHEZ BARRIOS, M.I., *La elección de los miembros del Consejo General...* op.cit.

⁴⁴ STC 108/1986, de 29 de julio (FJ 8 y FJ 3)

349⁴⁵ de la LOPJ. Igualmente, de la LOTC⁴⁶ cabe extraer que existe un régimen de incompatibilidades que privan a los magistrados de este Tribunal de ocupar un sillón en el CGPJ.

Tampoco podrán ser vocales los Jueces de Paz, Magistrados Suplentes, Jueces en régimen de provisión temporal y Jueces sustitutos⁴⁷, de conformidad con lo dispuesto en **el artículo 298.2⁴⁸ de la LOPJ.**

En cuanto a los juristas de reconocida competencia, podrán ser escogidos para los puestos de vocales Abogados y Licenciados, Doctores, o Catedráticos en Derecho, necesitando estos tres últimos de la premisa consistente en haber desempeñado alguna tarea o profesión jurídica más allá de la mera actividad docente, doctrinal o investigadora. También en el turno de juristas entrarían los Letrados de la Administración de Justicia y los provenientes de la Carrera Fiscal⁴⁹.

El requisito “de reconocida competencia” no es un simple adorno legislativo sino que se exige haber desempeñado tareas jurídicas y ser objetiva y empíricamente un experto en el arte del Derecho con más de quince años de ejercicio en su profesión. Los criterios de

⁴⁵ “Los jueces y magistrados estarán en situación de servicio activo cuando ocupen plaza correspondiente a la Carrera Judicial, cuando se encuentren adscritos provisionalmente, cuando hayan sido nombrados jueces adjuntos, o cuando les haya sido conferida comisión de servicio con carácter temporal”. (artículo 349).

⁴⁶ Artículo 19.1 LOTC: “El cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional es incompatible: Primero, con el de Defensor del Pueblo; segundo, con el de Diputado y Senador; tercero, con cualquier cargo político o administrativo del Estado, las Comunidades Autónomas, las provincias u otras Entidades locales; cuarto, con el ejercicio de cualquier jurisdicción o actividad propia de la carrera judicial o fiscal; quinto, con empleos de todas clases en los Tribunales y Juzgados de cualquier orden jurisdiccional; sexto, con el desempeño de funciones directivas en los partidos políticos, sindicatos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales y con toda clase de empleo al servicio de los mismos; séptimo, con el desempeño de actividades profesionales o mercantiles. En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial”.

⁴⁷ SÁNCHEZ BARRIOS, M.I., *La elección de los miembros del Consejo General...* op., cit.

⁴⁸ “También ejercen funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la Carrera Judicial, con sujeción al régimen establecido en esta ley, sin carácter de profesionalidad y con inamovilidad temporal, los magistrados suplentes, los que sirven plazas de jueces como sustitutos, los jueces de paz y sus sustitutos”. (art. 298.2)

⁴⁹ SÁNCHEZ BARRIOS, M.I., *La elección de los miembros del Consejo General...* op. cit.

excelencia profesional pueden ser más teóricos que prácticos, puesto que en algunas ocasiones han primado otros intereses.

Es menester reseñar, por último, que existe un régimen de incompatibilidades para los juristas, delimitado en **el artículo 567.3 de la LOPJ**: (...) *“Quien, deseando presentar su candidatura para ser designado Vocal, ocupare cargo incompatible con aquél según la legislación vigente, se comprometerá a formalizar su renuncia al mencionado cargo si resultare elegido”*.

6.2.Forma de elección.

La forma de elección de los vocales del CGPJ aparece también recogida en la Constitución Española de 1978⁵⁰, en el art. 122.3, y su contenido se ha desarrollado, primeramente en la L.O. 1/1980, de 10 de enero, del Consejo General del Poder judicial y, más tarde, en la LOPJ, habiendo sido esta última objeto de varias reformas, algunas muy problemáticas.

6.2.1. Ley Orgánica 1/1980 del Consejo General del Poder Judicial.

En esta norma se desarrolla por primera vez lo preceptuado en la Constitución con respecto al modo de elección de los miembros del CGPJ. Esta ley parte de la premisa de que correspondía a los jueces y magistrados elegir a aquellos vocales del Congreso que no tuvieran origen parlamentario, es decir, a sus iguales, de tal forma que estos vocales de procedencia judicial eran nombrados “entre” y “por” Jueces y Magistrados. Así las

⁵⁰ Artículo 122.3 de la Constitución: *“El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”*.

cosas, sus artículos 7⁵¹ y 8⁵² preveía que Jueces y Magistrados nombrarían a tres magistrados del TS, a seis magistrados y a tres jueces mediante un sistema electoral un tanto complejo, con circunscripción única, listas completas y abiertas, y bajo un sistema mayoritario de voto limitado⁵³. Los exigentes requisitos a los que se someten la presentación de candidaturas, que debían ser avaladas por el diez por ciento del cuerpo electoral, y las restricciones que en aquel momento existían para fundar asociaciones profesionales, dan la imagen de un sistema electoral disfuncional o exteriorizan la idea de que el legislador únicamente apostaba por el establecimiento de una única asociación profesional⁵⁴. De hecho, este sistema facilitó que el CGPJ estuviera controlado durante un tiempo por la APM (Asociación Profesional de la Magistratura)⁵⁵.

Este precedente normativo, salvo el último matiz previamente expuesto, vino a reiterar lo dispuesto en la Constitución.

Aún así, con respecto a ella surgieron diversas polémicas en cuanto a si podían ser electores o elegibles los miembros del Ministerio Fiscal o Secretarios Judiciales y demás personal colaborador de la Administración de Justicia. En el **artículo 2 de esta ley** se le encomendó al Consejo la autoridad sobre ellos, con excepción del Ministerio Fiscal. Sin embargo esto no conllevó para los implicados el derecho a elegir o a ser elegidos, pudiendo únicamente acceder al CGPJ mediante el cupo de juristas de reconocida

⁵¹ “El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte Vocales nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que establece la presente Ley; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegido en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre Abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión” (Art. 7 de la LO 1/1980).

⁵² “Los doce Vocales de procedencia judicial serán elegidos entre Jueces y Magistrados pertenecientes a todas las categorías judiciales, en los términos establecidos en la presente Ley. Integrarán el Consejo tres Magistrados del Tribunal Supremo, seis Magistrados y tres Jueces”. (Art. 8 de la LO 1/1980).

⁵³ GARCÍA COSTA, F.M., “Consideraciones sobre el sistema de elección de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial”. *Anales de Derecho*. 2008. p. 429-444.

⁵⁴ GERPE LANDÍN, M., “La composición del Consejo General del Poder Judicial...” op.cit.

⁵⁵ SERRA CRISTÓBAL, R. “La elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial: una propuesta de Consejo más integrador e independiente”. *Teoría y realidad constitucional*, 2013, no 31, p. 299-322.

competencia. Precisamente el cupo de juristas de reconocida competencia fue criticado por cierto sector conservador que advertía que la magistratura podía verse politizada, al ser nombrados estos miembros por el Parlamento. Sin embargo, esto puede contemplarse de una forma bastante más optimista: no solo supone un marco de colaboración entre los poderes legislativo y judicial, sino que también se refuerza el principio democrático en la composición del Consejo; además de ser un modelo empleado en numerosas democracias de nuestro entorno.⁵⁶

6.2.2. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial.

Durante los cinco años de vigencia del modelo consagrado en 1980, la doctrina lo acogió con notable aceptación y formuló críticas constructivas acerca de su eventual mejora. Sin embargo, hacia 1985 empezaron a surgir corrientes de naturaleza política que abogaban por modificar de arriba a abajo la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial.

Los resultados de las Elecciones Generales de 1982 habían dado a Felipe González, candidato por el PSOE, una amplia mayoría absoluta y, en este contexto, se comenzó a tramitar en el Congreso de los Diputados la que luego sería la LOPJ de 1985. El cambio en la forma de elección de los miembros del CGPJ no había estado en el centro de las prioridades a lo largo del iter parlamentario de la LOPJ. Solamente al final del trámite, sin previo aviso, y en una enmienda “in voce” del Grupo Mixto, se quiso introducir la modificación que luego vio la luz. Dicho cambio fue objeto de grandes y apasionadas discusiones parlamentarias. Era la primera vez que se contemplaba que la selección de la totalidad de los vocales del Consejo corrieran a cargo de Congreso y Senado; consecuentemente se trataba de despojar a los Jueces y Magistrados y, especialmente, a la asociación mayoritaria de la Judicatura del poder e influencia de los que hasta entonces habían disfrutado.⁵⁷

La propuesta inicial fue obra del Diputado Bandrés, del Grupo Mixto, que fue suscrita posteriormente por el PSOE. Diferentes enmiendas fueron presentándose. El nuevo

⁵⁶ SÁNCHEZ BARRIOS, M.I., *La elección de los miembros del Consejo General...* op. cit.

⁵⁷ SERRA CRISTÓBAL, R. “La elección de los miembros del...” op.cit.

sistema⁵⁸ suscitó la crítica de diversos grupos parlamentarios y la nueva ley no fue apoyada de forma unánime, contando con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, Minoría Catalana, y Grupo Parlamentario centrista.

La oposición representada por Alberto Ruíz Gallardón dando voz a 55 parlamentarios del Grupo Popular, interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra **los artículos 112.1 y 112.3 de la LOPJ**, por supuesta violación del artículo 122.3 de la Constitución.

El TC se pronunció al respecto en la ya citada sentencia 108/1986 desestimando el recurso y avalando la nueva forma de elección de los vocales, no sin antes advertir que:

*“se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial”*⁵⁹

Esta sentencia no dejó a nadie indiferente, y provocó un intenso debate en el seno de la doctrina⁶⁰. Una postura interesante es la defendida por PEDRAZ PENALVA, que argumenta que realmente es indiferente quién proponga a los miembros del CGPJ. Lo relevante, dice, es que los proponentes obedezcan a razones técnicas y no políticas. Las

⁵⁸ Artículo 112:

“1. Los Vocales del Consejo General del Poder Judicial serán propuestos por el Congreso de los Diputados y por el Senado.

2. Cada Cámara elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, cuatro Vocales entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de quince años en el ejercicio de su profesión, procediendo para ello según lo previsto en su respectivo Reglamento.

3. Además, cada una de las Cámaras propondrá, igualmente por mayoría de tres quintos de sus miembros, otros seis Vocales elegidos entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales que se hallen en servicio activo.

4. En ningún caso podrán ser elegidos:

a) Quienes hubieran sido miembros del Consejo saliente.”

b) Quienes presten servicios en los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial.

⁵⁹ STC 108/1986, de 29 de julio (FJ 13)

⁶⁰ SÁNCHEZ BARRIOS, M.I., *La elección de los miembros del Consejo General...* op. cit.

dudas con respecto a este sistema son legítimas y razonables, pero más relevante es la independencia subjetiva: que cada uno de sus miembros sea capaz de rehuir cualquier otra motivación que no sea la de reforzar al máximo el órgano en el que se integra, alejándose de cualquier clase de mediatización en el ejercicio de su labor.

6.2.3. Ley Orgánica 2/2001, de 28 de Junio, sobre composición del Consejo General del Poder Judicial.

La forma de elección instaurada en la etapa de gobierno socialista estuvo vigente durante más de 15 años. En el año 1996 el Partido Popular gana las elecciones y accede al poder por primera vez en la historia democrática española. Para la aprobación del nuevo modelo se deberá esperar al año 2001, en el que se establece una nueva forma de elección de los vocales del Consejo, concretamente de aquellos que son propuestos de entre Jueces y Magistrados (**artículo 122 CE**).

El día 14 de Febrero de 2001 el Ministro de Justicia presentó ante la Comisión de Justicia e Interior su plan para la Reforma de la Justicia. Esgrimió el Ministro que había tomado nota de las críticas de los ciudadanos al CGPJ, que aparecía como un organismo clientelar, siendo su propuesta de un nuevo modelo un instrumento para la erradicación de la politización existente.

La propuesta no fue bien recibida por los grupos de la oposición, siendo el socialista el más acérrimo detractor de la misma. Sin embargo, ambas fuerzas estrecharon posturas y suscribieron el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia con el propósito de “prestigiar al Consejo General del Poder Judicial”.

Algunas formaciones políticas hicieron manifestar su descontento, al considerar que habían sido excluidas del proyecto. Aun así, este se aprobó por amplia mayoría (248 a favor y 11 en contra).

El artículo único de la Ley 2/2001 modificaba los artículos relativos a la elección de los vocales del CGPJ. De esta forma Congreso y Senado eligen a los miembros que provienen de la judicatura sobre la base de las candidaturas que previamente formulen las asociaciones profesionales y los no asociados de la Carrera Judicial.

El nuevo sistema permite que se elaboren treinta y seis propuestas, es decir, tres nombres por cada uno de los doce puestos a ocupar.

Las asociaciones profesionales⁶¹ propondrán dieciocho candidatos, cuya distribución dependerá de la cantidad de afiliados de cada una de ellas, y lo harán en la forma establecida en los estatutos. Los no adscritos a ninguna asociación propondrán los dieciocho candidatos restantes. Quienes estén interesados en acceder deben obtener el aval de un porcentaje de Jueces o Magistrados en activo superior o igual al 2% de la categoría judicial y que no sean miembros de ninguna asociación profesional.

Una vez propuestos los nombres, el Congreso y el Senado elegirán seis candidatos respectivamente. El único requisito establecido es que cada uno debe ser elegido por mayoría de 3/5 de las dos cámaras.

La novedad de esta reforma radica en que el proceso de selección de los doce vocales provenientes de la judicatura adquiere una mayor transparencia. También se intenta equilibrar el protagonismo entre las asociaciones profesionales -penalizadas en la reforma anterior- y los Jueces y Magistrados que no están adscritos a ninguna.

De tal forma, el artículo 112 de esta Ley quedaba redactado de la siguiente manera:

“Los doce miembros que conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución han de integrar el Consejo entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales serán propuestos para su nombramiento por el Rey de acuerdo con el siguiente procedimiento:

- 1. Podrán ser propuestos los Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales que se hallen en servicio activo y no sean miembros del Consejo saliente o presten servicios en los órganos técnicos del mismo.*
- 2. La propuesta será formulada al Rey por el Congreso de los Diputados y el Senado, correspondiendo a cada Cámara proponer seis Vocales, por mayoría de tres quintos de sus respectivos miembros, entre los presentados a las Cámaras por los Jueces y Magistrados conforme a lo previsto en el número siguiente.*

⁶¹ SÁNCHEZ BARRIOS, M.I., *La elección de los miembros del Consejo General...* op. cit.

3. Los candidatos serán presentados, hasta un máximo del triple de los doce puestos a proponer, por las asociaciones profesionales de Jueces y Magistrados o por un número de Jueces y Magistrados que represente, al menos, el 2 por 100 de todos los que se encuentren en servicio activo. La determinación del número máximo de candidatos que corresponde presentar a cada asociación y del número máximo de candidatos que pueden presentarse con las firmas de Jueces y Magistrados se ajustará a criterios estrictos de proporcionalidad, de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Los treinta y seis candidatos se distribuirán en proporción al número de afiliados de cada asociación y al número de no afiliados a asociación alguna, determinando este último el número máximo de candidatos que pueden ser presentados mediante firmas de otros Jueces y Magistrados no asociados; todo ello, de acuerdo con los datos obrantes en el Registro constituido en el Consejo General del Poder Judicial conforme a lo previsto en el artículo 401 de la presente Ley Orgánica y sin que ningún Juez o Magistrado pueda avalar con su firma más de un candidato.

b) En el caso de que el número de Jueces y Magistrados presentados con el aval de firmas suficientes supere el máximo al que se refiere la letra a), sólo tendrán la consideración de candidatos los que, hasta dicho número máximo, vengan avalados por el mayor número de firmas. En el supuesto contrario de que el número de candidatos avalados mediante firmas no baste para cubrir el número total de treinta y seis, los restantes se proveerán por las asociaciones, en proporción al número de afiliados; a tal efecto y para evitar dilaciones, las asociaciones incluirán en su propuesta inicial, de forma diferenciada, una lista complementaria de candidatos.

c) Cada asociación determinará, de acuerdo con lo que dispongan sus Estatutos, el sistema de elección de los candidatos que le corresponda presentar.

4. Entre los treinta y seis candidatos presentados, conforme a lo dispuesto en el número anterior, se elegirán en primer lugar seis Vocales por el Pleno del Congreso de los Diputados, y una vez elegidos estos seis Vocales, el Senado elegirá los otros seis entre los treinta candidatos restantes.”

6.2.4. Ley Orgánica 4/2013, de 28 de Junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial.

Esta ley modificó otra vez la LOPJ. En 2013 presidía el Ejecutivo Mariano Rajoy Brey y el Grupo Parlamentario Popular disfrutaba de una mayoría absoluta en las dos cámaras.

La nueva norma deroga los artículos de la LOPJ en los que se regulaba el CGPJ (**arts. 111 y ss.**); **pasando a estar ubicados en el Libro VIII** (arts. 558 y ss.).

Esta reforma se mantiene en los límites de la **LO 6/1985**, pero se modifica el procedimiento de selección. Con este nuevo modelo⁶² se permite la presentación de candidatos previa aportación de su *curriculum vitae*, un documento explicando su plan de actuación y 25 avales de Jueces y Magistrados; decide de forma no vinculante una junta electoral de carácter especial. Los 12 puestos se distribuyen entre 3 Magistrados del TS, 3 Magistrados con más de tres años de antigüedad, y 6 Jueces y Magistrados que no precisan de este último requisito. También, con esta reforma se toma buena cuenta de las proporciones⁶³ reales de Jueces y Magistrados adscritos y no adscritos a las asociaciones profesionales, aunque estas no perdieron apenas peso en el Consejo.

Así las cosas, actualmente la regulación de la elección del CGPJ se encuentra definida de este modo:

“Artículo 567.

1. Los veinte Vocales del Consejo General del Poder Judicial serán designados por las Cortes Generales del modo establecido en la Constitución y en la presente Ley Orgánica, atendiendo al principio de presencia paritaria entre hombres y mujeres.

2. Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez Vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años

⁶² GÓMEZ COLOMER, J. L., “Sobre el nombramiento del presidente y de los vocales del consejo general del poder judicial. una reflexión desde el sentido común”. *Teoría y Realidad Constitucional*. 2019. vol. 2019. no 44.

⁶³ SÁNCHEZ BARRIOS, M. I., “Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial [BOE n.º 155, de 29-VI-2013]”s . *AIS: Ars Iuris Salmanticensis*, 2013. vol. 1. no 2. p. 216-219.

de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial, conforme a lo previsto en el Capítulo II del presente Título.

3. Podrán ser elegidos por el turno de juristas aquellos Jueces o Magistrados que no se encuentren en servicio activo en la carrera judicial y que cuenten con más de quince años de experiencia profesional, teniendo en cuenta para ello tanto la antigüedad en la carrera judicial como los años de experiencia en otras profesiones jurídicas. Quien, deseando presentar su candidatura para ser designado Vocal, ocupe cargo incompatible con aquél según la legislación vigente, se comprometerá a formalizar su renuncia al mencionado cargo si resultare elegido.

4. Las Cámaras designarán, asimismo, tres suplentes para cada uno de los turnos por los que se puede acceder a la designación como Vocal, fijándose el orden por el que deba procederse en caso de sustitución.

5. En ningún caso podrá recaer la designación de Vocales del Consejo General del Poder Judicial en Vocales del Consejo saliente.

6. El cómputo de los plazos en los procedimientos de designación de Vocales del Consejo General del Poder Judicial y de elección del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, así como del Vicepresidente del Tribunal Supremo, se realizará por días hábiles cuando el plazo se señale por días, empezando a computarse desde el día siguiente, y de fecha a fecha cuando se fije en meses o años. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo se entenderá que el plazo expira el último del mes”.

De las sucesivas reformas, según GOMEZ COLOMER, se pueden inferir dos consecuencias: que el legislador no ha encontrado la regulación ideal del CGPJ, incluida la relativa a la que afecta a los nombramientos de sus 20 vocales y de su Presidente; y que cada modificación se realiza con el motivo de controlar políticamente al Consejo.

7. CONCLUSIONES.

PRIMERA.

La función principal del CGPJ, y para la cual fue creado, es asegurar la independencia de Jueces y Magistrados, tal y como aparece mandatado en la Constitución.

SEGUNDA.

Sería ingenuo no reconocer que existen obstáculos y presiones que dificultan la consecución de este objetivo primordial. Estas injerencias, normalmente, suelen provenir del poder político.

TERCERA.

El CGPJ ha sufrido diferentes modificaciones legislativas a lo largo de 40 años. A pesar de ello, el modelo de autogobierno escogido por el legislador, dentro de los posibles, ha resultado ser el idóneo en muchas ocasiones para tratar de evitar la influencia de las amenazas que suelen cernirse sobre el Poder Judicial.

CUARTA.

A lo largo de la senda constitucional, las Cortes Generales han ido progresivamente adquiriendo una mayor influencia en el CGPJ. Esta situación ha sido provocada por las reformas legislativas que han ido alterando, cada cierto tiempo, el modelo de elección de los vocales.

QUINTA.

De este trabajo sacamos en claro que los Jueces y Magistrados son independientes para desgracia de las formaciones políticas. Episodios como la confesión del Senador popular que relato más arriba, y la querencia de algunos responsables políticos por comentar toda resolución judicial que les perjudique a la hora de consolidar su discurso muestran a las claras que el respeto a la independencia judicial no es una realidad en nuestro país.

SEXTA.

El CGPJ asume multitud de competencias de carácter orgánico, reglamentario y económico. Esto provoca, en ocasiones, algunas disfunciones en la Administración de Justicia. No obstante, y en defensa del órgano, se ha de decir que en muchos casos no se cuenta con el respaldo económico suficiente en la legislación presupuestaria para que el Consejo pueda elaborar un presupuesto de acuerdo a sus necesidades.

SÉPTIMA.

Desde no pocos sectores de la sociedad se ataca al CGPJ. Se dice que es un órgano anquilosado en el pasado, fuertemente ideologizado y que su forma de proceder rema en contra de la evolución de nuestra sociedad. Aunque alguna de estas críticas pueda tener su parte de razón, a menudo se efectúan con mala fe y con carencia de sentido constructivo, pero sobre todo demostrando una supina ignorancia acerca de la institución. No cabe duda de que al Consejo le quedan aspectos todavía por pulir, como la forma de elección de sus vocales, pero sin embargo, su labor garantiza la efectiva separación de poderes, pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho.

8. BIBLIOGRAFÍA.

- .- AROZAMENA SIERRA, J., “Sistema Español De Función Judicial. La Carrera Judicial”. *Documentación Administrativa*, no. 210-211, 1987.
- .- BALLESTER CARDELL, M., “El papel del Consejo General del Poder Judicial en defensa de la independencia de los Jueces”. *El poder judicial: VI Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España*. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009. p. 117-154.
- .- BUSTOS GISBERT, R., “La Independencia Judicial en Europa”. *Independencia Judicial y Estado Constitucional : el estatuto de los jueces* . Valencia: Tirant lo Blanch 2006, pp. 81-109.
- .- GARCÍA COSTA, F. M., “Consideraciones sobre el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial”. *Anales de Derecho*. 2008. p. 429-444.
- .- GERPE LANDÍN, M., “La composición del Consejo General del Poder Judicial.” *Revista del Centro de Estudios Constitucionales*, 1991, no 9, p. 145-174.
- .- GÓMEZ COLOMER, J. L., “Sobre el nombramiento del presidente y de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Una reflexión desde el sentido común.” *Teoría y Realidad Constitucional*. 2019. vol. 2019. no 44.
- .- LÓPEZ BOFILL, H., “Reflexiones sobre los orígenes de la Independencia Judicial”. *Independencia Judicial y Estado Constitucional : el estatuto de los jueces* . Valencia: Tirant lo Blanch 2006, pp. 81-109
- .- LÓPEZ GUERRA, L.M., “El gobierno de los jueces”. *Parlamento y Constitución. Anuario*, 1997, no 1, p. 11-32.
- .- MURILLO DE LA CUEVA, P.L., “El Gobierno del Poder judicial: los modelos y el caso español.” *Revista de las Cortes Generales*, 1995, p. 167-239.

- .- MONTERO RÍOS, E. “Discurso leído por el Excmo. Sr. D. Eugenio Montero Ríos en la solemne apertura de los tribunales, celebrada en 15 de septiembre de 1870”, *Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia*, Madrid, 1870.
- .- MURILLO DE LA CUEVA, P.L., “La independencia y el gobierno de los jueces. Un debate constitucional.” *Teoría y Realidad Constitucional*, no. 40, 2017, pp. 351-368.
- .- PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., “Los derechos del hombre en 1789: reflexiones en el segundo centenario de la Declaración Francesa.” 1989.
- .- PÉREZ-UGENA Y COROMINA, A., “El Consejo General del Poder Judicial y las Cortes Generales”. *Universidad Complutense de Madrid. Servicio de Publicaciones*, 2001.
- .- ROA ROA, J.E., “La Independencia de la Corte Constitucional de Colombia y la acción pública de constitucionalidad”, *Independencia Judicial y Estado Constitucional: el estatuto de los jueces* . Valencia: Tirant lo Blanch 2006, pp. 81-109.
- .- RON LATAS, R.P; LOUSADA AROCHENA, J.F., “El Consejo General del Poder Judicial: marco constitucional.” *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, 2016, vol. 20, p. 206-225.
- .- RON LATAS, R.P; LOUSADA AROCHENA, J.F., “Los consejos de la magistratura y otros modelos de gobierno judicial.” *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*. 2017. vol. 21. p. 300-313.
- .- SÁNCHEZ BARRIOS, M.I., “Antecedentes del Consejo General del Poder Judicial”, *Revista Poder Judicial*, vol. 46, 1997, págs. 49-82.
- .- SÁNCHEZ BARRIOS, M.I., *Las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial*. Salamanca. Tesitex. 1999.
- .- SÁNCHEZ BARRIOS, M.I., *La elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial español y de sus homólogos europeos* .Valencia. Tirant lo Blanch. 2007.

.- SÁNCHEZ BARRIOS, M.I., “Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial [BOE n.º 155, de 29-VI-2013].” *AIS: Ars Iuris Salmanticensis*, 2013. vol. 1. no 2. p. 216-219.

.- SERRA CRISTÓBAL, R., “La elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial: una propuesta de Consejo más integrador e independiente. *Teoría y realidad constitucional*, 2013, no 31, p. 299-322.

.- WHEELER, R., “Origins of the Elements of Federal Court Governance”.

9. RECURSOS WEB.

.- www.senat.fr (febrero, 2020)

.- <https://data.bnf.fr/> (marzo, 2020)

.- <https://www.conseil-constitutionnel.fr/es/declaracion-de-los-derechos-del-hombre-y-del-ciudadano-de-1789> (marzo, 2020)

.- https://www.elplural.com/politica/cosido-pillado-en-whatsapp-controlaremos-desde-detras-la-sala-segunda_206595102 (abril, 2020)

.- <https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/> (abril, 2020)

.- <https://www.europapress.es/nacional/noticia-cgpj-crea-comision-igualdad-formaran-dos-unicas-mujeres-son-vocales-20070425172401.html> (mayo, 2020)

10. LEGISLACIÓN CONSULTADA.

- .- Constitución Española de 1812.
- .- Constitución Española de 1931.
- .- Constitución Española de 1978.
- .- Constitución Italiana de 1947.
- .- Constitución Francesa de 1958.
- .- Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, del Consejo General del Poder Judicial.
- .- Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
- .- Ley Orgánica 2/2001, de 28 de Junio, sobre composición del Consejo General del Poder Judicial.
- .- Ley Orgánica 4/2013, de 28 de Junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial.
- .- Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
- .- Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
- Ley Orgánica 7/2015 de 1 de julio, por la que se modifica la lo 6/1985 del Poder Judicial.